



Asamblea General

Distr. general
29 de agosto de 2012
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

21º período de sesiones

Tema 10 de la agenda

Asistencia técnica y fomento de la capacidad

Asistencia técnica y fomento de la capacidad para Sudán del Sur en la esfera de los derechos humanos

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*

Resumen

El presente informe se ha preparado de conformidad con la resolución 18/17 del Consejo de Derechos Humanos, relativa a la asistencia técnica y fomento de la capacidad para Sudán del Sur en la esfera de los derechos humanos. Contiene un esbozo de los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Sudán del Sur en su calidad de nuevo Estado de escaso desarrollo que emerge de décadas de hostilidades. Se señalan los canales prioritarios para prestar asistencia al Gobierno de Sudán del Sur en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos.

La Alta Comisionada subraya la importancia de apoyar los esfuerzos que han emprendido el Gobierno y los asociados en el desarrollo con miras a fomentar la capacidad de las instituciones que garantizan el estado de derecho y formula recomendaciones específicas respecto de medidas destinadas a solucionar los problemas de capacidad pendientes.

* Documento presentado con retraso.

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–8	3
II. Antecedentes	9–15	4
III. Problemas y prioridades en materia de derechos humanos	16–35	5
A. Protección	19–21	6
B. Administración de justicia y estado de derecho.....	22–26	7
C. Protección de las libertades de expresión, asociación y reunión.....	27–29	8
D. Promoción y protección de los derechos de la mujer.....	30–31	8
E. Derechos económicos, sociales y culturales	32	8
F. Lagunas del marco jurídico para la protección de los derechos humanos	33–35	9
IV. Esferas prioritarias de asistencia técnica	36–61	9
A. Marco jurídico	42–46	10
B. Sistema judicial.....	47–52	11
C. Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur.....	53–55	12
D. Servicio Penitenciario Nacional de Sudán del Sur.....	56	12
E. Comisión de Derechos Humanos.....	57–60	12
F. Programas de sensibilización sobre cuestiones de género	61	13
V. Conclusión y recomendaciones	62–64	13

I. Introducción

1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 18/17 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo invitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a que, en colaboración con el Gobierno de Sudán del Sur, determinara y evaluara los ámbitos de asistencia y apoyara, si este lo solicitase, sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos, y le pidió que presentara un informe sobre la aplicación de la resolución 18/17 al Consejo en su 21º período de sesiones.
2. En la resolución 18/17, el Consejo de Derechos Humanos celebró los compromisos adquiridos por el Gobierno de Sudán del Sur de reforzar los mecanismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, y pidió al Gobierno que cumpliera esos compromisos. El Consejo también alentó a la comunidad internacional a proporcionar asistencia técnica y financiera al Gobierno de Sudán del Sur y a apoyar la labor del país encaminada a la promoción y la protección de los derechos humanos.
3. Del 8 al 12 de mayo de 2012, la Alta Comisionada visitó Sudán del Sur, donde se reunió con el Presidente del país y oficiales superiores del Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur, el Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y otros asociados de las Naciones Unidas, y organizaciones de la sociedad civil. Hizo también una visita sobre el terreno a Bor, en el estado de Jonglei. La misión proporcionó a la Alta Comisionada la oportunidad de observar de primera mano la situación de los derechos humanos en Sudán del Sur y entablar un diálogo con diversos interesados sobre medios y arbitrios para progresar en la consecución de los objetivos del país en materia de derechos humanos.
4. Posteriormente, del 13 al 18 de mayo de 2012, un equipo integrado por personal del ACNUDH realizó una misión a Sudán del Sur. Aprovechando la experiencia derivada de la visita de la Alta Comisionada, celebraron reuniones de trabajo intensivas con diversos agentes estatales, incluidos representantes del Ministerio de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Reforma Legislativa y la Comisión de Examen Constitucional, el Comité de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Asamblea Nacional de Sudán del Sur y el Vicepresidente de la Corte Suprema de Sudán del Sur. El equipo también se reunió con funcionarios de la UNMISS y otros organismos y órganos de las Naciones Unidas con actividades en el país y con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.
5. El presente informe se basa en la información facilitada al ACNUDH por el Gobierno de Sudán del Sur, la UNMISS y otras fuentes, incluidos los fondos y programas de organismos de las Naciones Unidas en Sudán del Sur.
6. El 26 de abril, el ACNUDH envió una nota verbal a todos los Estados Miembros acreditados ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y a todos los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas a fin de solicitarles información sobre la asistencia que estarían en condiciones de prestar a Sudán del Sur. Se recibieron contribuciones del Canadá, Eslovaquia, España, Grecia, Luxemburgo, México y Noruega, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, todos los cuales actualmente financian y ejecutan programas relacionados con los derechos humanos en Sudán del Sur.
7. Se envió un borrador del presente informe al Gobierno de Sudán del Sur a fin de recabar sus observaciones con respecto a los datos utilizados.

8. El ACNUDH desea expresar su agradecimiento al Gobierno de Sudán del Sur, la UNMISS, los organismos de las Naciones Unidas con actividades en Sudán del Sur y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil por su cooperación y sus contribuciones al presente informe.

II. Antecedentes

9. Tras casi dos décadas de guerra civil entre el Norte y el Sur y un período provisional de cinco años y medio como región autónoma con arreglo al Acuerdo General de Paz de 2005, Sudán del Sur pasó a ser independiente el 9 de julio de 2011 tras un referendo celebrado en enero de ese año, en el que una abrumadora mayoría votó a favor de la secesión del Sudán.

10. Durante el período provisional de seis años previsto por el Acuerdo General de Paz, Sudán del Sur, que tenía carácter autónomo, cumplió las condiciones políticas para la transición y estableció instituciones nacionales. La Constitución de transición, promulgada para abarcar el período provisional, estipuló los derechos de los ciudadanos y las funciones básicas de las diversas ramas del Gobierno. El Gobierno puso en marcha el Plan de desarrollo de Sudán del Sur, en el que se esbozaron los principales objetivos y actividades del Estado. Sudán del Sur también comenzó a establecer y sistematizar las principales funciones del Estado, incluida la tributación y la recaudación de rentas, y redactó las leyes fundamentales. Durante ese período también se registró el regreso de más de 2 millones de sudaneses del Sur, muchos de los cuales retornaban de países vecinos.

11. Sin embargo, como todo Estado nuevo, Sudán del Sur enfrenta varios desafíos importantes y complejos. Su capacidad para prestar servicios básicos, fomentar la seguridad y promover el estado de derecho y los derechos humanos sigue siendo deficiente. Su economía está dominada casi completamente por el sector del petróleo; la pobreza está generalizada y casi todo el país carece de infraestructura. La corrupción es endémica y existen muy pocos mecanismos de rendición de cuentas como para disuadir la utilización o gestión impropias de los recursos públicos. Más del 80% del presupuesto anual del Estado, que asciende a 2.000 millones de dólares (actualmente reducido debido a las medidas de austeridad adoptadas tras la suspensión de las exportaciones de petróleo, que representaban el 98% de los ingresos del país), se destina al pago de los salarios de las fuerzas de seguridad y la administración pública, lo que da lugar a una economía basada únicamente en los salarios del sector público. Las inversiones en infraestructura y en la prestación y el desarrollo de servicios básicos han sido mínimas, especialmente fuera de Juba, con la consiguiente falta de la infraestructura estatal necesaria para proteger e integrar al gran número de retornados del Norte y de países vecinos. Por otra parte, el nuevo Estado se ha visto acosado por la violencia y la inseguridad resultantes de tensiones entre las distintas comunidades, abusos por parte de las fuerzas de seguridad, débiles instituciones de fomento del estado de derecho y tensas relaciones con su vecino, el Sudán.

12. A estos problemas se suman décadas de marginación y guerra que han hecho que Sudán del Sur tenga hoy en día algunos de los peores indicadores de desarrollo humano del mundo. Se estima que más del 90% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y la mitad del total de niños no va a la escuela. La región registra la segunda tasa de mortalidad materna más alta del mundo; en un año típico, un 20% de la población lucha por tener algo que comer. Menos del 40% de la población tiene acceso a atención de la salud. Se dice que una niña de 15 años en Sudán del Sur tiene más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que de terminar la escuela secundaria. La causa fundamental de esos problemas es el elevado nivel de analfabetismo, que se traduce en una falta de sensibilización con respecto a los derechos humanos y los valores democráticos.

13. Uno de los mayores desafíos es la creación de instituciones para reforzar la gobernanza y el estado de derecho sobre la base de los principios de inclusión y transparencia políticas. La capacidad de muchas de las instituciones de gobierno, incluidas no sólo la legislatura, el sistema judicial y las principales instituciones del poder ejecutivo, sino también el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA) actualmente en el poder y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, sigue siendo insuficiente. El marco jurídico y el estado de derecho, en particular el régimen de derecho consuetudinario, son deficientes. Aún no se han promulgado muchas leyes, mientras que otras deben armonizarse con las normas internacionales de derechos humanos. Sudán del Sur todavía no ha ratificado todos los principales tratados internacionales de derechos humanos.

14. La falta de una presencia significativa del Estado, especialmente fuera de los principales centros urbanos, ha tenido como consecuencia una creciente militarización de los civiles. En extensas zonas del país, la policía, los fiscales y el aparato judicial padecen de una escasez crónica de recursos y de una falta de capacitación adecuada. Pese a algunos progresos en la profesionalización de la policía gracias a programas de capacitación y a la creación de un centro nacional de formación, el Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur, con una tasa de analfabetismo estimada en un 90%, sigue enfrentando graves problemas. Esta capacidad insuficiente explica en parte la usurpación de las atribuciones de la policía por el SPLA. La creación de instituciones nacionales como la Comisión de Derechos Humanos se ha visto gravemente afectada por las recientes medidas de austeridad. Debido a éstas, la Comisión carece de la capacidad y los recursos necesarios para cumplir su mandato, incluidas sus funciones de supervisión.

15. Si bien muchas de las amenazas a la seguridad y estabilidad de Sudán del Sur son internas, las relaciones con el Sudán se deterioraron hasta el punto de llevar al país al borde de la guerra en su primer año de existencia. Las tensiones políticas entre ambos Estados han continuado en el período posterior a la independencia debido a la incapacidad de resolver problemas fundamentales relacionados con algunos aspectos del Acuerdo General de Paz, incluidos la demarcación de fronteras, la distribución de la riqueza y el destino del territorio en litigio de Abyei. Las tensiones han estallado, con enfrentamientos en Abyei y en los estados de Kordofan y el Nilo Azul en el Sudán. El Sudán acusa a Sudán del Sur de apoyar a los insurgentes del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés del Norte (SPLA-N), acusación que ha sido desmentida por el Gobierno en Juba. La última escalada de violencia, la peor desde que Sudán del Sur accedió a la independencia, ocurrió en abril de 2012 cuando Sudán del Sur capturó y ocupó Heglig, cuyos yacimientos de petróleo representan aproximadamente la mitad de la producción de petróleo del Sudán, tras acusar a este país de utilizar la zona como plataforma para lanzar ataques contra Sudán del Sur. En respuesta a la presión internacional, el Gobierno de Sudán del Sur anunció el retiro incondicional del SPLA de Heglig. Entre tanto, las hostilidades entre las Fuerzas Armadas del Sudán y el SPLA-N en los estados sudaneses de Kordofan meridional y el Nilo Azul y sus partidarios ha dado lugar a una gran corriente de refugiados hacia Sudán del Sur, de los cuales más de 170.000 se han asentado en los estados del Alto Nilo y Unity.

III. Problemas y prioridades en materia de derechos humanos

16. Como nuevo Estado que emerge de años de conflicto y subdesarrollo, Sudán del Sur enfrenta un gran número de problemas de derechos humanos que ponen en peligro la paz, seguridad y estabilidad del país y la región. El Gobierno se ha comprometido a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y ha alcanzado algunos progresos en cuanto a la formulación de leyes y políticas a tal fin. Durante el examen

periódico universal de Sudán del Sur¹, el Gobierno señaló que desde la celebración del Acuerdo General de Paz había comenzado a reforzar su administración y sus instituciones de gobernanza, en particular mediante la creación de una comisión de derechos humanos con el mandato de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Señaló asimismo que su Constitución de transición incorporaban las disposiciones y los principios básicos de derechos humanos, en particular los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

17. Pese a los logros antes mencionados, durante el examen periódico universal las delegaciones expresaron varias preocupaciones y cuestiones, por ejemplo, el impacto de los conflictos armados en la población civil; la lucha contra la impunidad; la necesidad de que el país complete su transición de una sociedad militarizada a un sistema democrático basado en el estado de derecho; la creación de mecanismos eficaces de derechos humanos para garantizar el respeto de los derechos humanos, incluidas instituciones nacionales de derechos humanos que se rijan por los principios de París; la ratificación de los principales tratados internacionales de derechos humanos; y el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones con miras a la abolición definitiva de la pena de muerte². En su mayoría, las recomendaciones emanadas del examen periódico universal aún no se han aplicado plenamente.

18. Los principales problemas en materia de derechos humanos señalados en el presente informe hacen eco de las recomendaciones del examen periódico universal y guardan relación con la incapacidad del Gobierno de proteger a los civiles, las deficiencias en la administración de justicia y el estado de derecho, la necesidad de proteger los derechos de la mujer, la falta de disfrute de los derechos sociales y económicos y la necesidad de resolver las deficiencias del marco jurídico.

A. Protección

19. El Gobierno de Sudán del Sur tiene la responsabilidad primordial de proporcionar seguridad y protección a su población civil. El gran número de pérdidas humanas en Sudán del Sur como consecuencia del conflicto armado pone de relieve la incapacidad del Estado de proteger a los civiles. La inmensa mayoría de las víctimas de los actos de violencia cometidos en el país son civiles, incluidos mujeres y niños. Entre los autores de esos actos se cuentan desde bandidos que actúan por cuenta propia hasta grupos étnicos fuertemente armados, a veces movilizados en masa. Pese a que las tensiones entre los distintos grupos de Sudán del Sur existen desde hace varias generaciones, la violencia ha aumentado notablemente debido a la proliferación generalizada de las armas de fuego. Según se informa, en 2011 solamente, más de 3.000 personas fallecieron en enfrentamientos violentos en Sudán del Sur³. Es probable que la escalada del conflicto se intensifique a medida que surgen controversias por la utilización de los escasos recursos entre las comunidades locales y el creciente número de personas que retornan del Sudán y otros países vecinos.

¹ Sudán del Sur participó en el 11º período de sesiones del examen periódico universal en mayo de 2011 aunque en esa fecha aún no era un Estado independiente. El examen se llevó a cabo sobre la base de una disposición especial que reconocía el estatuto autónomo de Sudán del Sur durante el período de transición con arreglo al Acuerdo General de Paz.

² Véase A/HRC/18/16, párrs. 83 y 84.

³ Véase el informe del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Sudán del Sur (2012-2013).

20. En diciembre de 2011 y enero de 2012 se registraron graves enfrentamientos violentos entre comunidades del estado de Jonglei que tuvieron como resultado un gran número de víctimas y el desplazamiento masivo de civiles. Según un informe publicado por la UNMISS tras el incidente, la incapacidad del Gobierno de proteger a los civiles contra la violencia, investigar los incidentes ocurridos con anterioridad y llevar a los responsables ante la justicia fue uno de los detonantes de esos ataques, que causaron más de 800 muertos⁴. A mediados de octubre de 2011, el Gobierno puso en marcha una operación de desarme de civiles en Jonglei a fin de poner fin a la proliferación generalizada de armas en ese estado. En el contexto de la operación de desarme se denunciaron violaciones de derechos humanos, incluidos incidentes de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

21. La población civil sigue siendo la más afectada por los enfrentamientos fronterizos entre Sudán del Sur y el Sudán. Pese a los constantes esfuerzos de la comunidad internacional para solucionar las controversias entre ambos Estados, durante el período que se examina el Sudán siguió lanzando ataques aéreos indiscriminados contra Sudán del Sur, con la consiguiente pérdida de vidas y desplazamiento masivo de civiles a lo largo de la zona fronteriza. La corriente masiva de desplazados ha dado lugar a enormes problemas de protección. Las lluvias torrenciales han obstaculizado el acceso a los principales campamentos situados a lo largo de la frontera, en particular para los defensores de los derechos humanos, lo que ha dejado a los desplazados sin protección ante una catástrofe humanitaria. Además, se ha informado de que la situación de inseguridad generalizada ha propiciado muchos casos de abuso sexual.

B. Administración de justicia y estado de derecho

22. Uno de los legados de años de conflicto armado y subdesarrollo en Sudán del Sur es un sistema judicial débil, ineficiente e inapropiado. La escasez de agentes de policía profesionales y de jueces y abogados calificados en la mayor parte de Sudán del Sur, así como la falta de capacitación, infraestructura, transporte y equipo básicos, afecta gravemente la administración de justicia. La cobertura y jurisdicción del sistema de justicia formal son de alcance limitado y el acceso a la justicia sigue estando muy restringido. La capacidad de muchas instituciones gubernamentales para imponer el estado de derecho y promover y proteger los derechos humanos es escasa. El sistema de justicia tradicional, imperante en más del 80% del país, se basa principalmente en prácticas consuetudinarias y tradicionales que muy a menudo contravienen las disposiciones legales y las normas internacionales de derechos humanos. Estas deficiencias crónicas afectan adversamente la administración de justicia, incluido el derecho a las garantías procesales y la representación legal.

23. La pena capital sigue estando en vigor en Sudán del Sur; en 2011 fueron ejecutados al menos seis reclusos pese a que no gozaron de representación legal. El acceso a la asistencia letrada es limitado y los abogados son, además de caros, demasiado escasos en la mayoría de las zonas. La deficiente capacidad de servicios de fiscalía y el número insuficiente de jueces siguen causando frecuentes violaciones de los derechos humanos en la administración de justicia, como largas demoras de los juicios, demasiadas devoluciones de causas, prisión preventiva prolongada en espera de juicio y hacinamiento en las cárceles.

⁴ Véase el informe de la UNMISS sobre los incidentes violentos entre las comunidades en Jonglei, Sudán del Sur, 25 de junio de 2012. Puede consultarse en <http://unmiss.unmissions.org/Default.aspx?tabid=4969&language=en-US>.

24. Debido en gran parte a la insuficiente capacitación de la fuerza policial, los arrestos arbitrarios con privación de libertad son muy comunes en Sudán del Sur y por lo general van acompañados de otras graves violaciones de los derechos humanos de los detenidos, como la tortura u otros malos tratos, y de la privación de libertad prolongada. Muchas personas han sido detenidas a raíz de arrestos y juicios viciados, o sin ninguna justificación legal válida. La responsabilidad de tales abusos recae en toda una gama de funcionarios estatales, como la policía y el personal militar y de seguridad. A veces la injerencia de figuras militares y políticas en el sistema de justicia tiene como consecuencia el arresto o detención arbitrarios, pues la policía suele actuar bajo órdenes o amenazas y no de conformidad con la ley. El arresto y la detención de familiares en lugar de los sospechosos siguen siendo prácticas comunes, así como la custodia protectora, el encarcelamiento por impago de deudas y la detención prolongada en espera de juicio. En algunos casos se detiene y enjuicia a niños junto con adultos y no se les ofrecen programas de rehabilitación u oportunidades educativas suficientes en prisión. A falta de instituciones psiquiátricas en el país, las personas que dan muestras de inestabilidad mental a menudo son recluidas en establecimientos penitenciarios. Entre tanto, las condiciones en las prisiones en todo el país continúan siendo extremadamente precarias, con celdas hacinadas y poco higiénicas e infraestructuras dilapidadas.

25. La impunidad es generalizada en Sudán del Sur, especialmente entre los miembros de las fuerzas de seguridad. A menudo los miembros del SPLA rehúsan someterse a la autoridad civil. Los abusos de derechos humanos no suelen investigarse y rara vez se identifica y enjuicia a los autores. Los agentes de la seguridad del Estado gozan de aparente inmunidad total respecto de las violaciones de derechos humanos, en particular los arrestos arbitrarios con privación de libertad, los malos tratos a los detenidos, la violencia sexual y de género y las violaciones del derecho a la vida.

26. La falta casi total de capacidad de investigación y enjuiciamiento en relación con delitos graves cometidos en el contexto de la violencia entre comunidades es motivo de grave preocupación. Pese a que tras los incidentes violentos de Jonglei se estableció un comité de investigación, el Gobierno aún debe demostrar su determinación de exigir responsabilidades a los autores de esos actos de violencia. De modo similar, en marzo de 2011, tras una investigación dirigida por las Naciones Unidas, el Gobierno creó un comité para que investigara las acusaciones de tortura, violación y asesinato de alumnos de una academia de policía en las cercanías de Juba. El comité presentó sus conclusiones y recomendaciones al Gobierno. Hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida para llevar a los autores ante la justicia.

C. Protección de las libertades de expresión, asociación y reunión

27. Los periodistas y los defensores de los derechos humanos en Sudán del Sur son víctimas de intimidación y detención mientras desempeñan su labor. Se informa de que las fuerzas de seguridad del Estado someten a los periodistas a acoso, arresto arbitrario y privación de libertad por publicar artículos con críticas al Gobierno. En noviembre de 2011, las fuerzas de seguridad arrestaron sin cargos al editor y editor adjunto de un periódico local tras la publicación de un artículo que contenía críticas al Presidente. Ambos periodistas afirmaron que fueron golpeados y torturados mientras estuvieron detenidos. Del mismo modo, en mayo de 2012, un periodista de la radio fue detenido en Rumbek, en el estado de Lake, por haber participado en un programa radial interactivo en el que los oyentes que llamaban por teléfono criticaron a la policía por exigir el pago de un soborno a las personas que deseaban hacer una denuncia.

28. En parte debido al temor de ser objeto de acoso e intimidación, las organizaciones de la sociedad civil no han podido desempeñar un papel efectivo en el fomento de la

sensibilización sobre los derechos humanos en Sudán del Sur. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la mayoría de esas organizaciones carece de la capacitación, la especialización y los recursos necesarios para contribuir de manera significativa al proceso de democratización y a la promoción y protección de los derechos humanos. Uno de los principales desafíos es el de prestar el apoyo necesario para reforzar efectivamente la capacidad de la sociedad civil para vigilar y denunciar las violaciones de derechos humanos y promover la defensa de éstos junto con el Gobierno.

29. Los miembros de varios grupos políticos y de oposición en diversas partes del país también han sido víctimas de arrestos arbitrarios y privación de libertad por parte del SPLA en relación con sus actividades políticas. En el estado del Alto Nilo, se denegó a las Naciones Unidas la posibilidad de visitar a nueve miembros del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés para el Cambio Democrático presuntamente detenidos por el SPLA. El SPLA ha desmentido la detención de esas personas. De igual modo, las Naciones Unidas no pudieron tener acceso a detenidos sudaneses, en su mayoría originarios de Darfur y Misseriya, supuestamente detenidos por el SPLA por motivos políticos.

D. Promoción y protección de los derechos de la mujer

30. En Sudán del Sur, las mujeres y niñas siguen siendo víctimas de discriminación y abuso, en particular de violencia doméstica, matrimonio forzado y violencia sexual. Pese al compromiso expreso del Gobierno de fomentar el empoderamiento de la mujer, la discriminación contra la mujer sigue siendo endémica y generalizada, y resulta exacerbada en parte por las prácticas culturales y tradicionales. Las mujeres y las niñas se ven sistemáticamente privadas de sus derechos básicos, como el derecho a la educación y el derecho a elegir cónyuge o poseer o heredar bienes.

31. Aunque la Constitución de transición de Sudán del Sur y la legislación contienen garantías de protección de las mujeres y niñas, esas disposiciones casi nunca se cumplen. Rara vez se investigan los delitos graves cometidos contra mujeres. Las cuestiones relativas al derecho de la familia, el matrimonio, el divorcio y la tutela también suelen resolverse con arreglo al derecho consuetudinario, el cual no otorga los mismos derechos a la mujer que al hombre y tiende más a fomentar la reconciliación que a garantizar la rendición de cuentas. Estas desigualdades fuertemente arraigadas afectan a todas las mujeres del país, pero sobre todo a las mujeres pobres de las comunidades rurales.

E. Derechos económicos, sociales y culturales

32. En un clima de extrema pobreza y subdesarrollo, el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales sigue estando vedado a la gran mayoría de los ciudadanos de Sudán del Sur, en particular el derecho a la alimentación, la salud, el acceso al agua potable y la higiene, la educación y la vivienda adecuada. De hecho, el 78% de la población de Sudán del Sur vive por debajo del umbral de pobreza. El analfabetismo es generalizado; por ejemplo, sólo el 4% de los niños del estado de Unity asiste a la escuela. Sudán del Sur tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo y los indicadores muestran una preocupante prevalencia cada vez mayor del VIH. El acceso a los alimentos también es motivo de grave preocupación; en cinco estados los indicadores muestran una incipiente hambruna y el 40% de la población depende de las raciones de alimentos. Sólo el 25% de la población tiene acceso a agua potable. Se prevé que estos indicadores empeoren a medida que aumenta la corriente de personas originarias de Sudán del Sur que retornan del Sudán.

F. Lagunas del marco jurídico para la protección de los derechos humanos

33. Sudán del Sur ha adoptado medidas importantes, aunque incompletas, con miras a establecer un marco jurídico para la protección de los derechos humanos. En particular, en 2006 la Asamblea Legislativa Nacional aprobó la ley por la que se creó la Comisión de Derechos Humanos y el Gobierno ha celebrado amplias consultas sobre el proyecto de ley de partidos políticos y cuestiones electorales. Sin embargo, quedan por promulgar leyes importantes, como las relativas a los medios de comunicación, la sociedad civil nacional y los servicios nacionales de inteligencia.

34. Sudán del Sur cuenta con un ordenamiento jurídico mixto en el que coexisten el derecho consuetudinario y el derecho positivo. El artículo 5 c) de la Constitución de transición de la República de Sudán del Sur reconoce "las costumbres y las tradiciones del pueblo" como una de las fuentes del derecho en Sudán del Sur. La Constitución reconoce asimismo la aplicación del derecho consuetudinario en los tribunales, con sujeción a la Constitución y las leyes, conforme a lo dispuesto en el artículo 167 3). La aplicación del derecho consuetudinario impone costumbres, tradiciones y normas que contravienen los principios de derechos humanos consagrados en la Carta de Derechos de la Constitución de transición de Sudán del Sur.

35. En julio de 2012 Sudán del Sur se adhirió a los Convenios de Ginebra pero aún debe ratificar los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tampoco es parte en los principales instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos será un importante paso hacia la creación de un clima propicio para la promoción y protección de los derechos humanos. El Gobierno se ha comprometido a ratificar todos los principales tratados internacionales de derechos humanos a fin de sentar las bases para un marco jurídico nacional conducente a la protección de los derechos humanos.

IV. Esferas prioritarias de asistencia técnica

36. La asistencia técnica a Sudán del Sur en la esfera de los derechos humanos debería basarse en las políticas y programas que actualmente está ejecutando el Gobierno de Sudán del Sur con el apoyo de la UNMISS, el equipo de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y los asociados para el desarrollo del país.

37. Ya se han desplegado considerables esfuerzos y fondos para la creación de un marco jurídico y normativo en el que se dé prioridad a la protección de los derechos humanos. En agosto de 2011, el Gobierno aprobó el Plan de desarrollo de Sudán del Sur para el período 2011-2013, en el que se enumeran las prioridades para el desarrollo y fortalecimiento del nuevo Estado y se identifican los derechos humanos y la igualdad de género como cuestiones intersectoriales.

38. En julio de 2012, el equipo de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y el Gobierno firmaron el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Sudán del Sur, el cual es compatible con el Plan de desarrollo de Sudán del Sur. Uno de sus objetivos es mejorar el acceso a la justicia y el estado de derecho, especialmente la función gubernamental central relativa a la judicatura, el cumplimiento de la ley y el sistema penitenciario. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

presta apoyo material y técnico al Ministerio de Justicia, la judicatura, la policía y los servicios penitenciarios y la Comisión de Derechos Humanos.

39. La UNMISS también presta asistencia a los servicios policiales y penitenciarios, la justicia civil y militar, el sector de la seguridad y la Comisión de Derechos Humanos por conducto de las oficinas especializadas de la misión, a saber, la policía de las Naciones Unidas, la Oficina de Apoyo al Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad y la División de Derechos Humanos.

40. La UNMISS, en asociación con el PNUD, ha puesto en marcha un proyecto de las Naciones Unidas sobre indicadores del estado de derecho, un instrumento concebido con el fin de vigilar los cambios en la actuación de las instituciones de la justicia penal, a saber, los órganos encargados de hacer cumplir la ley y los sistemas judicial y penitenciario, y de establecer un indicador de referencia para evaluar los progresos. El proyecto proporcionará una herramienta esencial para la formulación de los futuros programas de fomento de la capacidad y asistencia técnica.

41. El ACNUDH ejecuta su programa de derechos humanos en Sudán del Sur por conducto de la División de Derechos Humanos de la UNMISS. La División tiene el mandato de vigilar la situación de los derechos humanos e informar al respecto, así como prestar asistencia técnica. En la División se ha creado una dependencia especial para las actividades de cooperación técnica. La División también forma parte del equipo de las Naciones Unidas en el país, en el que cumple principalmente la función de promover la integración de los derechos humanos en los programas humanitarios y de desarrollo.

A. Marco jurídico

42. Debería prestarse el apoyo necesario a las instituciones que participan en la formulación del marco jurídico en Sudán del Sur a fin de garantizar que la legislación esté en consonancia con las obligaciones internacionales y que el examen constitucional y los procesos legislativos sean inclusivos y transparentes. Entre esas instituciones cabe mencionar la Comisión de Examen Constitucional de Sudán del Sur, la Comisión de Reforma Legislativa, el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Nacional.

43. La Comisión de Examen Constitucional, establecida en virtud del artículo 200 de la Constitución de transición, tiene el mandato de examinar la Constitución de transición. Es preciso apoyar la labor de la Comisión para que pueda cumplir su mandato, en particular en lo que respecta a la reunión de opiniones y sugerencias de parte de todos los interesados y llevar a cabo un programa de información pública y educación cívica a nivel nacional.

44. La Comisión de Reforma Legislativa de Sudán del Sur fue creada como órgano constitucional independiente con arreglo al artículo 137 de la Constitución de transición a fin de realizar investigaciones con miras a ampliar, modernizar y reformar la legislación. Debería prestarse asistencia a la Comisión en su labor destinada a armonizar los regímenes de derecho consuetudinario con el derecho positivo de Sudán del Sur y los principios del derecho internacional. La experiencia adquirida por otros países con esa clase de ordenamiento jurídico mixto debería seguirse facilitando a Sudán del Sur por conducto de documentación y conferencias sobre temas jurídicos, viajes de estudio y asistencia técnica. En este contexto, el Ministerio de Justicia ya ha creado el Centro de Recursos de Derecho Consuetudinario en Rumbek, una iniciativa que cabría seguir apoyando.

45. La Dirección de Tratados y Convenciones Internacionales del Ministerio de Justicia, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, expresó interés por ampliar sus conocimientos sobre el proceso de ratificación y adhesión a los tratados internacionales. En respuesta a esa solicitud, la División de Derechos Humanos de la UNMISS organizó tres seminarios de capacitación sobre ese tema en febrero, marzo y

abril de 2012, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos, la Dirección de Tratados y Convenciones Internacionales del Ministerio de Justicia, el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Tras los seminarios, las Naciones Unidas también prestaron apoyo al Gobierno en la creación de un grupo de trabajo interministerial con la tarea de revisar proyectos de ley e iniciar la labor preparatoria en materia de ratificación de trabajos.

46. La División de Derechos Humanos de la UNMISS ha prestado servicios técnicos y de asesoramiento a la Asamblea Nacional por conducto del Comité de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Asamblea. Esa asistencia incluyó la revisión completa de la Ley de ciudadanía y de proyectos de ley relativos a los medios de comunicación con el fin de armonizar los proyectos de ley con las normas internacionales de derechos humanos. Además, la división ha aprovechado su red de oficinas sobre el terreno para llevar a cabo seminarios de capacitación sobre la promoción y protección de los derechos humanos destinados a parlamentarios, en particular en los estados de Unity y Bahr el Ghazal Septentrional. Para cumplir su objetivo de supervisar la actuación del poder ejecutivo en materia de derechos humanos y cuestiones humanitarias, sería útil seguir proporcionando a los miembros del Comité capacitación adicional sobre las normas internacionales de derechos humanos, posibilidades de intercambiar experiencias con parlamentarios de países vecinos y medios de reforzar sus aptitudes para las actividades de promoción y seguimiento.

B. Sistema judicial

47. Entre las esferas prioritarias para la asistencia técnica al sistema judicial se incluyen la capacitación continua de los jueces, fiscales y abogados, la asistencia letrada, los tribunales móviles y la creación de un marco amplio para la justicia juvenil.

48. Los fiscales, abogados y jueces de Sudán del Sur podrían sacar provecho de actividades de capacitación continua sobre la legislación relativa a la justicia penal, así como sobre las normas nacionales e internacionales de derechos humanos y derechos de la mujer. Por otra parte, la mayoría de los abogados inicia su práctica profesional inmediatamente después de egresar de la facultad de derecho, dado que el país carece de una institución de especialización profesional. El apoyo a la creación de un instituto de especialización jurídica también contribuiría a mejorar las aptitudes del personal jurídico en los ministerios y otras instituciones pertinentes.

49. La División de Derechos Humanos de la UNMISS ha emprendido iniciativas piloto en relación con la aplicación del derecho consuetudinario en Sudán del Sur. En este contexto, la UNMISS elaboró y llevó a cabo varios programas de capacitación destinados a las autoridades tradicionales del estado de Ecuatoria Occidental a fin de apoyar y reforzar los derechos humanos mediante intervenciones específicas centradas en sus atribuciones y mecanismos jurisdiccionales. La UNMISS también presta asesoramiento y capacitación al personal judicial de enlace y de libertad vigilada sobre cuestiones relacionadas con la detención prolongada y arbitraria. Es necesario apoyar esos programas y hacerlos extensivos a otras partes del país.

50. La asistencia letrada es también una esfera prioritaria de la asistencia técnica. Como lo ha reconocido el Ministerio de Justicia, la mayoría de la población de Sudán del Sur no está familiarizada con el derecho a la asistencia letrada gratuita o el derecho a contar con representación letrada en causas relacionadas con delitos graves de carácter penal o civil en los ámbitos de la tenencia de la tierra y la familia. El Ministerio de Justicia tiene previsto formular una estrategia de asistencia letrada para el período 2012-2014.

51. Todos los miembros del sistema judicial, representantes del Ministerio de Justicia y agentes internacionales que colaboran con la judicatura, conscientes de que un aumento del número de tribunales formales en un futuro cercano es improbable, han expresado interés por el establecimiento de tribunales móviles en Sudán del Sur. El derecho de acceso a la justicia no podrá ser efectivo a menos que se adopten medidas innovadoras como la creación de tribunales móviles.

52. El Gobierno reconoce que en Sudán del Sur no existe un sistema estructurado de justicia juvenil. Aún no se ha puesto en práctica la Ley de protección del niño y no se ha formado la Comisión Independiente de Protección del Niño. Por su parte, los fiscales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no están familiarizados con dicha Ley. Las actuales dependencias de justicia juvenil existentes en el Ministerio de Justicia deben ser reforzadas y es preciso formular un amplio marco normativo para la justicia juvenil.

C. Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur

53. El Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur requiere asistencia sostenida para poder llevar a cabo su mandato de prevenir, combatir e investigar los delitos, mantener el estado de derecho y el orden público, proteger a las personas y los bienes y hacer cumplir la Constitución y la ley.

54. Trescientos agentes de la policía de las Naciones Unidas están destacados en el Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur con el cometido de transferir sus conocimientos y aptitudes. Este importante aspecto de la asistencia técnica prestada a la policía se ve limitado por las dificultades que enfrenta la UNMISS para acceder a muchos lugares debido a la deficiente infraestructura. La policía de las Naciones Unidas, en colaboración con las partes interesadas, ha establecido un plan estratégico de capacitación para el período 2012-2015 que sienta las bases para el desarrollo institucional a largo plazo en el contexto del Plan estratégico para el Servicio Nacional de Policía para el período 2012-2013 y el Marco del plan de acción para 2011-2015. La División de Derechos Humanos de la UNMISS trabaja en estrecha colaboración con la policía de las Naciones Unidas proporcionándole módulos de derechos humanos específicos.

55. Convendría que los donantes y la comunidad internacional continuaran apoyando la prestación sostenida de asistencia técnica por la policía de las Naciones Unidas y concentraran los esfuerzos en las necesidades prioritarias del Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur, incluidas actividades de alfabetización para los agentes de policía, creación de infraestructura y capacitación en materia de investigación penal, violencia de género y derechos humanos.

D. Servicio Penitenciario Nacional de Sudán del Sur

56. El Servicio Penitenciario Nacional de Sudán del Sur no está en condiciones de desempeñar plenamente su misión de corrección, enmienda y rehabilitación. Los agentes internacionales que colaboran con el sistema penitenciario han elogiado el liderazgo del Servicio Penitenciario por estar familiarizado con las normas internacionales aplicables. Los principales problemas a que se enfrenta siguen siendo la falta de recursos y aptitudes del personal penitenciario, especialmente en los estados. A la luz de una evaluación de los establecimientos penitenciarios realizada en 2011 por la División de Derechos Humanos de la UNMISS en todos los estados, existen motivos de preocupación en lo que respecta a la situación de hacinamiento y las deficiencias de alimentarias y sanitarias. La Sección de Asesoramiento Penitenciario de la Oficina de Apoyo al Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad de la UNMISS proporciona asesoramiento y asistencia técnica al

Servicio Penitenciario y asigna a asesores en materia penitenciaria para que presten servicios en prisiones de las distintas regiones de Sudán del Sur. Pese a esta asistencia, se requieren nuevas instalaciones y mayor capacidad financiera y humana para mantener la infraestructura penitenciaria y cumplir las normas internacionales.

E. Comisión de Derechos Humanos

57. La Comisión de Derechos Humanos se creó en 2006 tras la firma del Acuerdo General de Paz. Sus funciones abarcan tanto la supervisión como la promoción. Entre las funciones de supervisión se cuentan la investigación, vigilancia y denuncia de las violaciones de derechos humanos. Sus funciones de promoción incluyen la formación, capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos. La Comisión mantiene oficinas en los 10 estados del país; sin embargo, debido a las medidas de austeridad actualmente en vigor, se han regionalizado las oficinas de los estados y de éstas sólo tres están en funcionamiento. La Comisión ha establecido un plan estratégico para el período 2012-2015 y ha preparado un plan de trabajo para 2012.

58. La UNMISS ha prestado apoyo constante a la Comisión de Derechos Humanos y, por su parte, el ACNUDH le ha asignado a un consultor. Esa consultoría ya ha hecho un aporte a la planificación y el desarrollo institucionales. No obstante, la Comisión enfrenta grandes desafíos. Dado que el público no está muy familiarizado con su labor, no recibe muchas denuncias y aún no ha publicado ningún informe sobre los problemas de derechos humanos. Los funcionarios de la Comisión, pese a su motivación, carecen de capacitación permanente en materia de investigación, vigilancia, presentación de denuncias, promoción y normas de derechos humanos. Además, la infraestructura física de la Comisión no ofrece condiciones de trabajo adecuadas.

59. Si bien la Comisión carece de financiación para llevar a cabo toda la gama de actividades que abarca su mandato, su capacidad para administrar con eficacia un mayor volumen de recursos tampoco es evidente. Sin embargo, incluso con sus limitados recursos, la Comisión podría esforzarse más para erigirse como voz rectora de los derechos humanos en el país. La Comisión debería imponerse la prioridad de ser un órgano independiente del Gobierno, y de ser percibida como tal, y adoptar una actitud más dinámica en la investigación de presuntas violaciones y en la defensa pública de los derechos humanos.

60. La capacidad de la Comisión de Derechos Humanos podría mejorarse mediante un subsidio de fomento institucional, siempre y cuando se establezcan pautas de referencia claras y la asistencia se preste gradualmente en entregas periódicas. Mediante ese subsidio también podría promoverse progresivamente el logro de una mayor independencia de la Comisión si los pagos se vinculan a un compromiso de velar por la transparencia de los nombramientos, garantizar la seguridad del cargo de sus titulares y la publicación de informes públicos sobre cuestiones relevantes de derechos humanos.

F. Programas de sensibilización en materia de género

61. El Gobierno de Sudán del Sur ha adoptado algunas medidas para hacer frente a la discriminación y la violencia contra la mujer, incluidas medidas para apoyar la educación de las niñas y garantizar una mayor participación de la mujer en el Gobierno. Queda mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a la formación y sensibilización en materia de derechos humanos. Con una tasa de analfabetismo que asciende al 80%, la mayoría de las mujeres y niñas apenas tiene conocimiento de sus derechos. Los programas destinados a impartir conocimientos a la población sobre los derechos legales de las mujeres y las niñas serán fundamentales para superar años de arraigadas prácticas discriminatorias contra la

mujer. El Gobierno debe demostrar más claramente su compromiso con la promoción y protección de los derechos de la mujer ratificando los principales tratados y convenciones sobre la materia, en particular la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África.

V. Conclusión y recomendaciones

62. Desde que declaró su independencia el 9 de julio de 2011, Sudán del Sur ha realizado esfuerzos importantes por sentar las bases de un nuevo país y establecer las instituciones necesarias para atender a las necesidades de su población. En la esfera de los derechos humanos se han alcanzado progresos en los planos institucional y legislativo.

63. No obstante, aún habrán de superarse enormes retos para lograr que el pueblo de Sudán del Sur viva en un país en el que se respetan plenamente los derechos humanos. Esos retos consisten en la formulación de un marco jurídico adecuado, el establecimiento o fortalecimiento de instituciones y la creación de un entorno propicio para la promoción y protección de los derechos humanos. Aunque las autoridades nacionales al más alto nivel han subrayado su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, subsisten importantes lagunas a este respecto.

64. Si bien la responsabilidad primordial de la promoción y protección de los derechos humanos incumbe al Gobierno de Sudán del Sur, el ACNUDH insta a la comunidad internacional a que preste asistencia a los agentes nacionales en aras de la aplicación de las siguientes recomendaciones:

a) Definir una estrategia clara en materia de derechos humanos mediante la elaboración de un plan de acción nacional de promoción de los derechos humanos que incluya objetivos, indicadores, líneas de responsabilidad y necesidades presupuestarias;

b) Velar por una presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional, incluido el sector judicial, a fin de proteger a la población contra la violencia y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la reparación;

c) Adoptar y aplicar un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos velando por la integración de los derechos humanos en todos los programas y políticas;

d) Tomar todas las medidas que sean necesarias para establecer un sólido marco jurídico para la promoción y protección de los derechos humanos en Sudán del Sur y, en particular:

i) Ratificar los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

ii) Garantizar que la legislación nacional, incluida la Constitución, esté en plena consonancia con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes;

iii) Velar por que la aplicación del derecho consuetudinario no contravenga las normas internacionales de derechos humanos;

- iv) Apoyar las instituciones pertinentes, como la Comisión de Examen Constitucional, la Comisión de Reforma Legislativa, el Ministerio de Justicia y el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, así como la aplicación de las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos, incluidas las formuladas en el contexto del examen periódico universal;
 - e) Velar por que se dé prioridad a la lucha contra la impunidad y, a este respecto, el Gobierno debería:
 - i) Empezar una reforma exhaustiva del sector de la seguridad con miras a poner fin a las violaciones cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y, a la vez, otorgar al Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur las herramientas necesarias para investigar los delitos y llevar a los responsables ante la justicia;
 - ii) Prestar apoyo a la creación de capacidad en el sector judicial y, en particular a la capacitación de jueces, fiscales y abogados; y establecer mecanismos de asistencia letrada y garantizar el derecho de las víctimas a la reparación;
 - iii) Ayudar a la Comisión de Derechos Humanos a cumplir su mandato proporcionándole financiación y asistencia técnica adecuadas;
 - iv) Apoyar al Servicio Penitenciario Nacional de Sudán del Sur, velando por que disponga de recursos y capacidad suficientes para prestar servicios penitenciarios en consonancia con las normas internacionales.
-